



Descomposición monárquica y regeneración republicana

por **Antonio Santamaría**

El vendaval de corrupción que asola el país está tensando al máximo las cuerdas del régimen de la Segunda Restauración borbónica. Ha llegado el momento de aglutinar fuerzas en torno al objetivo de la apertura de un proceso constituyente, la única manera de regenerar nuestra democracia.

La difusión de los papeles de Bárcenas explotó como una bomba termonuclear en uno de los pilares del sistema de partidos de la segunda restauración borbónica. El presidente de gobierno y gran parte de la cúpula del Partido Popular (PP) se vieron presuntamente implicados en una red institucionalizada de cobro de sobresueldos en dinero negro procedente de las grandes empresas que se beneficiarían de un trato de favor por estos pagos ilegales. Un escándalo que acaparó las portadas de los grandes medios de comunicación internacionales, precisamente en vísperas de la crucial entrevista entre Mariano Rajoy y Ángela Merkel en Berlín.

La tremenda detonación se produjo cuando las inquietantes vicisitudes del caso Noos señalan hacia arriba tras las imputaciones contra el secretario de las dos infantas reales. Un asunto delicado que corroe las bases del consenso político y mediático instituido en torno a la Corona tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Las andanzas de Iñaki Urdargarín y el equivocado comportamiento del Rey en el feo asunto de la cacería de elefantes han cuarteado la imagen de familia ejemplar construida con esmero preciosismo durante décadas por los medios de comunicación.

El problema de la corrupción en España va más allá del comportamiento individual de ciertos políticos o funcionarios públicos que abusan de sus cargos y actúan como delincuentes, sino que adquiere un carácter estructural en una metástasis que afecta al conjunto de las administraciones públicas. Desde la Casa Real a decenas de ayuntamientos, pasando por casi todas las comunidades autónomas, las instituciones están involucradas en graves casos de corrupción urbanística, como en Valencia y Baleares, cuyos presidentes hubieron de dimitir por su implicación en los casos Gürtel y Palma Arena. Tampoco la judicatura se ha escapado de la marea negra de corrupción y abuso de poder; en junio de 2012, Carlos Dívar presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura, dimitió acusado de malversación de caudales públicos en sus múltiples excursiones “gratis total” a Marbella.

El enriquecimiento ilícito de las elites del régimen contrasta violentamente con el creciente empobrecimiento de las clases asalariadas y alimenta una extraña mezcla de sensaciones entre la indignación y la desafección de la ciudadanía contra un régimen corrupto incapaz de reformarse.

Autismo político

La ocupación de las principales plazas de las ciudades españolas por el movimiento 15-M constituyó un serio aviso del profundo malestar social que se estaba incubando en el país. Un fenómeno complejo, de difícil interpretación, pero que cobraba particular relevancia al ser impulsado por una nueva generación que irrumpía en la vida pública y realizaba su primera experiencia política. Una juventud sin perspectivas, ni futuro, en un país con una tasa de paro juvenil que supera el 50% y bate todos los registros de la Unión Europea (UE), con uno de los porcentajes más elevados de fracaso de escolar y en la cola de los informes PISA de nivel académico.

La clase política reaccionó con una sordera rayana en el autismo a los mensajes del 15-M y ni se le ocurrió responder con algunas reformas de regeneración democrática del petrificado sistema de partidos como, por ejemplo, la revisión de la injusta ley electoral.

El 15-M eclosionó al final de la larga agonía política de Zapatero, en plena campaña de las municipales y autonómicas que precedieron a la resonante victoria de Mariano Rajoy en las generales.

Una mayoría absoluta sobredimensionada por el voto de castigo al PSOE, el otro pilar del sistema de partidos de la monarquía. Sin embargo, pronto la hegemonía institucional del PP en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Estado se vació de legitimidad democrática, al contravenir cínicamente los compromisos y promesas del programa electoral, su contrato con la ciudadanía.

Bipartidismo imperfecto

El sistema de partidos español ha sido calificado de bipartidismo imperfecto. PP y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al igual que conservadores y liberales en la monarquía alfonsina, se turnan en el poder con la corrección de los nacionalistas conservadores catalanes y vascos cuando las grandes formaciones estatales carecen de la mayoría absoluta parlamentaria que disfrutaron González, Aznar y Rajoy.

La ley electoral, escasamente respetuosa con la proporcionalidad del voto popular, y la circunscripción provincial, contradictoria con el Estado de las Autonomías, se diseñaron precisamente para primar la representación parlamentaria de los dos partidos del turno dinástico. Unas máquinas políticas que han generado una elite endogámica que no debe rendir cuentas ante sus electores, sino ante la cúpula del partido que los incluye en la lista electoral evocando las prácticas del *encasillado* de la primera restauración borbónica. Así, se ha producido una selección negativa del personal político donde triunfan los arribistas, palmeros, mediocres y corruptos... que han acapa-



rado los cargos públicos del país.

Un sistema de partidos donde se han mantenido o consolidado espesas redes clientelares con los Fabra en Castelló de la Plana, los Baltar o Cacharro en Galicia que no tienen nada que envidiar al *caciquismo* de los tiempos de primera restauración.

Las analogías históricas, aunque sugerentes, tienen sus limitaciones. En esta segunda restauración borbónica no existen poderosas y combativas centrales sindicales como CNT y UGT, donde se encuadraba gran parte de la clase obrera, sino organizaciones burocratizadas y financiadas por el Estado con una las tasas de afiliación más bajas de Europa. Tampoco existen aquella pujante cultura republicana ni aquellos potentes partidos antidinásticos, situados extramuros del sistema que funcionaron como alternativa cuando la monarquía entró en barrena.

**La confluencia de la triple crisis política,
social y territorial está tensando al máximo
las cuadernas de la monarquía parlamentaria.**

La gestión de la crisis financiera está erosionando profundamente a los dos grandes partidos del régimen. Primero le tocó al PSOE y ahora le está ocurriendo al PP. El profundo desgaste

de ambas formaciones explica el crecimiento de Unión Progreso y Democracia (UPyD) como refugio liberal de los electores desencantados del PP, y de Izquierda Unida (IU) como alternativa progresista a los votantes exasperados de un PSOE que se muestra incapaz de recuperarse a pesar del descrédito del PP. Pero, tanto UPyD como IU se mueven dentro del régimen y no han planteado un programa de ruptura democrática en la perspectiva de apertura de un proceso constituyente.

A la deslegitimación política y a la profunda recesión económica se añade el conflicto territorial planteado por el reto soberanista de Artur Mas. La burguesía catalana, liderada por Jordi Pujol, fue una pieza clave en los consensos constituyentes de la Transición que originaron ese extraño híbrido de centralismo y federalismo denominado Estado de las Autonomías. El reto soberanista de *Convergència i Unió* (CiU) dinamita otro de los consensos del régimen. Al fin y al cabo, el Estado autonómico se diseñó para satisfacer las reivindicaciones al autogobierno del movimiento nacionalista catalán y vasco. Un modelo que nunca ha acabado de funcionar y que deja de tener sentido cuando CiU rompe con este marco político-jurídico y apuesta por un proyecto independentista.



Hacia la Tercera República

El régimen de la segunda restauración borbónica se forjó en la Transición cuando los franquistas reformistas y los líderes de la oposición democrática pactaron a puerta cerrada la Constitución monárquica.

Entonces se hurtó a la ciudadanía el derecho fundamental a participar en un verdadero proceso democrático constituyente tras la larga dictadura, ciudadanía a la que sólo se le dejó intervenir en el trámite de un referéndum servido como las lentejas, o las tomas o las dejadas. También se instituyó la ominosa ley de

la amnesia histórica sobre la Segunda República y el franquismo: la única manera de legitimar una monarquía surgida del golpe de Estado del general Franco que designó a Juan Carlos I como su sucesor en la jefatura del Estado.

De este modo se generó una democracia de perfil muy bajo donde la participación popular en los asuntos públicos se reduce a votar periódicamente a los partidos del régimen, que gozan de unas de las tasas de afiliación más bajas de Europa.

Las demandas de regeneración democrática surgidas del 15-M y movimientos afines se encaminaron a exigir la disolución de las cámaras y la convocatoria de un proceso constituyente, ante la extremada rigidez de un sistema político, incapaz de reformarse. La desproporcionada represión policial a las concentraciones ante el Congreso de los Diputados que portaban a sus señorías esta reclamación fue una prueba del pavor que produjo entre los guardianes del régimen un movimiento cívico y político orientado hacia estos objetivos.

Estas propuestas hallaron escaso eco entre los políticos en activo, excepto Sánchez Gordillo o Julio Anguita, retirado este último del primer plano de la vida pública, quien desde Sabadell anunció su disposición a liderar este proceso de ruptura democrática, articulado en torno a la plataforma *Frente Cívico Somos Mayoría*.

La primera restauración borbónica demostró que la descomposición de un régimen puede ser muy larga y lenta, mientras no se construya la alternativa política capaz de sustituirlo. La confluencia de la triple crisis política, social y territorial está tensando al máximo las cuerdas de la monarquía parlamentaria.



**Este sistema de partidos ha mantenido
o consolidado espesas redes clientelares
que no tienen nada que envidiar al caciquismo
de los tiempos de primera restauración.**



El vendaval de corrupción que asola España, la dureza de una crisis económica que arroja a millones de personas a la miseria o la gravedad del reto soberanista catalán expresan el avanzado estado de descomposición del régimen y crea las condiciones, objetivas y subjetivas, para levantar esa alternativa política en la perspectiva de derrocar a esta monarquía manchada por la corrupción y proclamar la Tercera República.

No hay tiempo que perder ■